



Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B

Penal/Int

Visto, en Acuerdo de la Sala "B" –integrada- el expediente N° FRO 25176/2023/1/CA1, caratulado "Incidente de Extinción de la Acción Dte.: AFIP-DGI, IMPUTADO: CARNEVALE, Facundo Andrés s/Evasión Simple Tributaria" (proveniente del Juzgado Federal de la ciudad de San Nicolás n° 2), del que resulta que:

**El Dr. Aníbal Pineda dijo:**

1.- Se elevó la causa a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Dr. Matías F. Di Lello, Fiscal Federal contra la resolución de fecha 29 de abril de 2024 que dispuso: "I. Ordenar la extinción de la acción penal por reparación integral del perjuicio, en los términos del art. 59 inc. 6 del CP, de los hechos calificados como evasión del impuesto a las ganancias, ejercicio fiscal 2020, por la suma de dos millones setecientos siete mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos con veinticinco centavos (\$2.707.456,25) y el impuesto al valor agregado, ejercicio fiscal 2020, por la suma de un millón ochocientos noventa y cinco mil doscientos diecinueve pesos con treinta y siete centavos (\$1.895.219,37); conductas tipificadas en el art. 1° del Título IX de la ley 27.430, y, consecuentemente, ordenar el sobreseimiento de Facundo Carnevale, DNI Nro. 34.410.821; en los términos del art. 336 inciso 1° del CPPN."

2.- El recurrente se agravió de la aplicación del artículo 59, inciso 6 en los casos en los que se investigan delitos incluidos en el Régimen Penal Tributario.

Indicó que tal régimen poseería una normativa específica que prevé mecanismos determinados para extinguir la acción penal por pago para el delito en trato.

Refirió que, toda vez que el artículo 16 de la ley 27.430 permite la extinción de la acción penal en los casos previstos en los artículos 1°, 2°, 3°. 5° y 6°, el que se puede otorgar por única vez por cada persona



humana o jurídica obligada, otorgar el beneficio por el artículo 59, inciso 6 en lugar de hacerlo por el régimen específico para el caso, implicaría que los imputados, en el futuro, puedan pedir nuevamente la extinción de la acción penal ante una nueva evasión, circunstancia que estaría expresamente prohibida por la ley penal tributaria e iría en contra del espíritu de la ley.

3.- Concedido el recurso de apelación y elevadas las actuaciones, se dispuso la intervención de la Sala "B". Designada audiencia a los fines del artículo 454 del CPPN, se hizo saber a las partes la intervención del Dr. Aníbal Pineda, vocal de la Sala "A" de esta Cámara, en su carácter de juez de cámara subrogante, conforme lo dispuesto mediante Acordada nro. 223/2023 CFAR.

Mantenido el recurso por el Fiscal General, quedaron las actuaciones en condiciones de ser resueltas.

**Y Considerando que:**

1.- Conforme surge de la compulsa del expediente principal, la causa tuvo inicio a raíz de la denuncia penal efectuada por Mauro Gatti, Jefe (Int.) de la División Jurídica de la Dirección Regional Mercedes de la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva, contra la firma contribuyente Sales Gris S.A.S cuyo presidente era Facundo Andrés Carnevale por la presunta evasión simple, contemplada en el artículo 1 del Nuevo Régimen Penal Tributario establecido por la Ley 27.430, en relación al período fiscal 2020 del Impuesto a las Ganancias por un monto equivalente a pesos dos millones setecientos siete mil cuatrocientos cincuenta y seis con veinticinco centavos (\$ 2.707.456,25) y, en relación a idéntico período respecto del Impuesto al Valor Agregado por la suma de pesos un millón ochocientos noventa y cinco mil doscientos diecinueve con treinta y siete centavos (\$ 1.895.219,37.).

La denunciante hizo saber que, de la consulta efectuada al Registro Nacional de Reincidencia, se obtuvo que la contribuyente no fue denunciada con anterioridad por infracción a la Ley Penal Tributaria por lo que carecería de antecedentes.





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B

Asimismo, aclaró que la suma evadida en el Impuesto al Valor Agregado -junto con sus intereses resarcitorios- se encontraba regularizada en el plan de pagos N° Q883802, constituido con fecha 30/09/2022 en el marco de la RG 4268 - DEUDA PROVENIENTE DE FISCALIZACIÓN por la cantidad de 36 cuotas, con estado vigente al momento de la denuncia. En cuanto al monto evadido en el Impuesto a las Ganancias informó que fue íntegramente cancelado mediante pago bancario.

Delegada la instrucción en la fiscalía en los términos del artículo 196 del C.P.P.N, su representante solicitó que se le recibiera declaración indagatoria al denunciado.

Una vez notificado de la citación, el imputado compareció ante el juzgado con su defensor, quien opuso excepción de falta de acción en virtud de la cual, solicitó la suspensión de la declaración indagatoria, el sobreseimiento de su defendido y acompañó documental. En consecuencia, el a quo hizo lugar a la suspensión de la audiencia de declaración indagatoria y ordenó que se formara el presente incidente de extinción de la acción penal.

En su presentación, la defensa de Carnevale instó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de su asistido, principalmente, por aplicación de los artículos 30 inciso "a", 34 y 269 del Código Procesal Penal Federal y 59 inciso 6 del Código Penal y, en forma subsidiaria, por aplicación del artículo 16 de la ley 27.430. Ello, en base a que ambas deudas tributarias y sus intereses ya habrían sido totalmente canceladas por su defendido, aclarando que el pago efectuado por el período 2020 del Impuesto a las Ganancia se habría efectivizado en fecha 21 de octubre de 2022, mientras que, mediante plan de pagos n° Q883802 "MIS FACILIDADES RG 4268", de fecha 03/09/2022 se habría cancelado la deuda correspondiente al período 2020 del Impuesto al Valor Agregado.

Seguidamente, a pedido de la defensa, el a quo solicitó informe a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ex AFIP) la cual corroboró sus dichos.



Asimismo, el magistrado le corrió vista del escrito de la defensa al representante del Ministerio Público Fiscal quien, en virtud de los argumentos oportunamente expresados, consideró que lo correcto sería declarar su sobreseimiento en los términos del artículo 16 del Régimen Penal Tributario (artículo 279 de la Ley 27.430) y no por aplicación de los institutos de la conciliación o la reparación integral del perjuicio invocados por la defensa.

Mediante resolución de fecha 29 de abril de 2024, el juez de la anterior instancia resolvió en forma favorable al pedido de la defensa y ordenó la extinción de la acción penal por reparación integral conforme a la ley de fondo, sobreseyendo en consecuencia a Facundo Carnevale.

Para así decidir, sostuvo que, en base la jurisprudencia que citó y, dada la operatividad del artículo 59, inciso 6 del Código Penal, la ausencia de una exclusión específica para los delitos tributarios, acorde a una interpretación que respete los principios de última ratio, legalidad y pro homine, la aplicación de la forma de extinción solicitada resultaría viable para hechos como los investigados en autos. En esa línea, con motivo de la cancelación de las deudas tributarias por parte de la firma investigada, tuvo por reparado integralmente el daño causado.

2.- Establecido el marco fáctico en el cual habré de encuadrar los agravios de la fiscalía, cabe remarcar que, si bien de la ley 27.430 no surgen limitaciones a formas de extinción de la acción penal previstas en el artículo 59 del Código Penal como lo afirma el a quo, lo cierto es que la ley 27.430 es una norma especial que da un tratamiento particular al supuesto que dio origen a la presente, es decir el delito de evasión simple.

Al respecto, en concordancia con lo manifestado por el apelante, resulta oportuno recordar que el artículo 4 del Código Penal prevé que “Las disposiciones generales del presente código se aplicarán a todos los delitos previstos por leyes especiales, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario”.

Ahora bien, la ley penal tributaria no prohíbe la aplicación de la causa extintiva propuesta por la defensa, pero se trata de una ley especial que





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B

goza de plena vigencia, en cuyo artículo 16 se encuentra incluido expresamente el delito achacado a la firma contribuyente dentro del abanico de delitos por los cuales se puede extinguir la acción penal, por única vez, con el pago total y oportuno del monto adeudado. Con ello, se podría afirmar que la ley existente y vigente contempla y da una respuesta específica al caso en cuestión por lo que, no existiría motivo alguno para aplicar la ley de fondo que tiene un contenido más amplio y general (el subrayado me pertenece).

En ese sentido, vale tener presente el principio rector en virtud del cual la ley general no deroga a la ley especial anterior, siempre y cuando no medie supresión expresa o manifiesta incompatibilidad.

A su vez, esa postura se ajusta a lo resuelto por los miembros de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal en el marco del recurso de casación interpuesto dentro de la causa “Patagonia Fly SA y otros. s/recurso de Casación”, expediente cpe 44/2017/to1/3/cfc3”.

En esa oportunidad, la Dra. Ana María Figueroa expresó que: “Frente a la regulación concreta de la ley especial de los requisitos, oportunidad y efectos de la aceptación y cancelación total de las obligaciones evadidas, la decisión del magistrado de apartarse de dicha norma y hacer aplicación de la norma general estatuida en el Código Penal, en cuanto dispone en su art. 59 inciso 6º la extinción de la acción penal por conciliación o reparación integral del perjuicio, en menoscabo del principio de especialidad, se encuentra desprovista de cualquier tipo de argumentación que la justifique, lo que la tacha de arbitrariedad y la descalifica como acto jurisdiccional válido”.

A su vez, la magistrada consideró pertinente recordar que “...una interpretación situada, coherente y que no pierda de vista los objetivos centrales de los mandatos constitucionales, exige asumir con convicción, pero sin fanatismo, la presunción de no contradicción del ordenamiento jurídico en general (...) (arg. doct. Fallos: 330:2093)”, precepto que deriva de la doctrina del Alto Tribunal relativa a que “la inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen, por lo cual las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras, computando que los términos utilizados no son



superfluos sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, limitar o corregir los preceptos; desde esa comprensión, el Tribunal ha destacado que la primera fuente de interpretación de las leyes es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de ella, pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violencia de su texto o de su espíritu. (Fallos: 344:5; 338:488, y sus citas; subrayado agregado).”

3.- Por otro lado, como ya lo he expresado en un caso similar al que ahí nos ocupa y, en total consonancia con lo expresado por la parte apelante, considero que, pretender que la acción penal se extinga en base a los lineamientos establecidos en el código de fondo y no en función de la ley que lo regula especialmente, a todas luces, conformaría, más bien, un artilugio tendiente a no hacer uso del beneficio que brinda al contribuyente, por única vez, el artículo 16 1er. párrafo del art. 279 de la ley 27.430. De lo que se infiere que hacer lugar a tal pretensión defensiva, implicaría, de alguna manera, dejar abierta la posibilidad de que, en lo sucesivo, se adopte tal conducta en otras oportunidades con la garantía de salir ileso, todo lo cual dista de la finalidad y el espíritu de la ley (CFAR, esta Sala “Expte. N° FRO 21161/2023/1/CA1, “Legajo de apelación de Ciardola, Gerardo Juan s/ Evasión Simple Tributaria”, Acuerdo 27/06/2025”).

En dicha oportunidad, también sostuve que, la aplicación del supuesto de extinción previsto en el Código Penal en casos como el presente generaría, consecuentemente, que la causal establecida en el artículo 16 1er. párrafo del art. 279 de la ley 27.430 caiga en desuso frente a la solución propuesta en el régimen general.

4.- En conclusión, considero que, en el caso, siendo que la firma contribuyente no cuenta con antecedentes por delitos tributarios conforme fue informado por la denunciante y que el titular del Ministerio Público Fiscal manifestó expresamente que, de acuerdo a lo informado por AFIP, entendía correcto hacer lugar al pedido de extinción de la acción penal





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B

de los delitos investigados en el principal, resulta aplicable la causal de extinción de la acción establecida por el régimen específico para el delito investigado (artículo 16 de la ley 27.430).

5.- Por lo expuesto, propongo al Acuerdo receptar los agravios del Ministerio Público Fiscal, revocar la resolución y declarar la extinción de la acción penal en los términos del artículo 16 del Régimen Penal Tributario establecido por la ley 27.430 y, en consecuencia, ordenar el sobreseimiento de Facundo Andrés Carnevale (art. 336 del CPPN).

Así voto.

### **La Dra. Elida Vidal dijo:**

Vinieron los autos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Federal Matías Di Lello contra la decisión del 29/4/2024 que ordenó la extinción de la acción penal por reparación integral del perjuicio en los términos del art. 59 inc. 6 del C.P.; y en consecuencia, el sobreseimiento de Facundo Carnevale en relación a la evasión del Impuesto a las Ganancias por período fiscal 2020 por la suma de \$2.707.456,25 y el Impuesto al Valor Agregado, por el monto de \$1.895.219,37.

Analizados los motivos de agravio, se advierte que éstos refieren a cuestionar que el juez erróneamente había aplicado el instituto de la reparación integral del perjuicio contemplado en el art. 59 inc. 6) del CP., por entender el apelante que los delitos incluidos en el Régimen Penal Tributario, -como el caso que nos ocupa- poseen una normativa específica que prevé mecanismos determinados para extinguir la acción penal por cancelación total de la deuda.

Examinadas las actuaciones obrantes en la causa surge que, en oportunidad de ser citado a prestar declaración indagatoria, Facundo Carnevale con el patrocinio letrado del Dr. Mariano Cane presentó un escrito oponiendo excepción de falta de acción; solicitó la suspensión de la convocatoria y su sobreseimiento respecto de los hechos denunciados por haber sido canceladas totalmente las sumas reclamadas en concepto de Impuesto a las Ganancias e IVA.



Previo a resolver el pedido, el juez solicitó a la AFIP que informara si el contribuyente había cancelado la deuda tributaria que dio origen a la denuncia incoada en ese Juzgado, y en caso afirmativo, que hiciera saber si se había acogido con anterioridad a los beneficios del art. 16 del Título IX de la ley 27.430, todo lo cual fue contestado por el organismo el 23/4/2024.

En dicho informe -que se encuentra agregado digitalmente- la Administración puso en conocimiento del Juzgado que el contribuyente había abonado íntegramente la deuda reclamada en la denuncia conforme el detalle que acompañaban, señalando -además- que no se había acogido a los beneficios del art. 16 del RPT con anterioridad.

Luego, el magistrado le corrió vista al Ministerio Fiscal interviniente del planteo formulado por el imputado, cuyo titular expresamente manifestó que de acuerdo a lo informado por Afip, entendía correcto hacer lugar al pedido de extinción de la acción penal de los delitos investigados en autos.

Así, teniendo presente lo dictaminado por la Fiscal Federal Coadyuvante en su contestación, considero que corresponde acoger los argumentos expuestos por ese Ministerio al interponer su recurso, y declarar extinguida la acción penal aunque en atención a lo dispuesto por el Art. 16 del RPT establecido en la Ley 27.430 y no en virtud del art. 59 inc. 6 del C.P., como lo sostuvo el juez en la decisión impugnada.

Ello por cuanto, conforme fuera analizada la cuestión por la suscripta, en el Acuerdo del 30/04/2024 dictado en autos “Legajo de Apelación en autos PREVENCIÓN ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. (querellante AFIP) por Apropiación Indevida de Recursos de la Seguridad Social”, expediente n° FRO 37231/2022/1/CA1, no procede la aplicación de la extinción de la acción penal en los términos propuestos por el magistrado instructor.

En aquella oportunidad sostuve: “...A su respecto, resulta preciso indicar que la ley n° 27.147 (B.O. 18/06/2015) introdujo en el Código Penal en el artículo 59 inciso 6°) la posibilidad de que la acción penal se extinguiera por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes.







## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B

En este sentido, sin profundizar el análisis respecto de la validez o vigencia de la causal incorporada en razón de su remisión a normas procesales, considero que en el caso que nos ocupa, existe una ley especial que contempla la misma cuestión a la que debemos atender, asistiéndole razón a los apelantes.

La Ley 27.430, que comenzó a regir a partir del 29/12/2017 -con posterioridad a la modificación introducida en el Código Penal-, estableció en el art. 16° que: “En los casos previstos en los artículos 1°, 2°, 3°, 5° y 6° la acción penal se extinguirá, si se aceptan y cancelan en forma incondicional y total las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus accesorios, hasta los 30 días hábiles posteriores al acto procesal por el cual se notifique fehacientemente la imputación penal que se le formula.

Para el caso, la Administración Tributaria estará dispensada de formular denuncia penal cuando las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus accesorios fueren cancelados en forma incondicional y total con anterioridad a la formulación de la denuncia. Este beneficio de extinción se otorgará por única vez por cada persona humana o jurídica obligada.”

A su vez, cabe señalar que el art. 4° del CP establece que las disposiciones generales de ese código se aplicarían a todos los delitos previstos por leyes especiales, en cuanto no dispusieran lo contrario.

En esa inteligencia, entiendo que -por imperio del art. 4° del código de fondo- no corresponde la aplicación de la norma contenida en el Código Penal, por ser ley general anterior a la norma especial posterior que se analiza.

No obstante ello, -como ya anticipé- teniendo en cuenta el motivo de agravio, considero que corresponde declarar la extinción de la acción penal en relación al delito de evasión del Impuesto a las Ganancias, ejercicio fiscal 2020, por la suma de \$2.707.456,25 e Impuesto al Valor Agregado, período fiscal 3/2020 por la suma de \$1.895.219,37, en virtud del art. 16 del RPT establecido en la Ley 27.430.

Así voto.

Por lo expuesto

Se resuelve:



I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal. II) Revocar, en lo que ha sido materia recursiva, la resolución del 29 de abril de 2024 y declarar la extinción de la acción penal en los términos del artículo 16 del Régimen Penal Tributario establecido por la ley 27.430. Insértese, hágase saber, regístrese y publíquese y oportunamente devuélvanse los autos al Juzgado de origen. La Dra. Silvina Andalaf Casiello no vota de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del art. 31 bis CPPN incorporado por el art. 4º de la ley 27.384. Fdo. Dres. Pineda - Vidal.-

---

*Fecha de firma: 09/09/2025*

*Alta en sistema: 10/09/2025*

*Firmado por: ELIDA ISABEL VIDAL, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: ANIBAL PINEDA, JUEZ DE CAMARA*

*Firmado por: MARIA VERONICA VILLATTE, SECRETARIA DE CAMARA*



#38853427#470923706#20250909105245557